

EDITORIALES

Crisis total

Ante la ineludible transición de Venezuela hacia la democracia, Maduro intenta acabar con el Parlamento como fuente de legitimidad

El año transcurrido desde que Nicolás Maduro juró su cargo hasta 2025 ante un Tribunal Supremo a su medida –tras unas elecciones a las que no concurrió la oposición– y Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional ha acabado ahondando el abismo venezolano. La Policía del régimen ha impedido esta semana que parlamentarios contrarios a Maduro y el propio Guaidó accedieran a la Cámara para renovar su mandato. Culminaba así la deriva que ha llevado a Venezuela del autoritarismo chavista a la dictadura de Maduro, basada en el desgobierno del país y la anulación de facto del poder legislativo. No se trata de una mera crisis política e institucional: 4,5 millones de venezolanos han huido al extranjero. De ellos, más de 24.000 se instalaron en España solo en la primera mitad de 2019, lo que convierte la crisis total en la que está sumida el país en una cuestión de primer orden para la agenda de nuestras instituciones. Hace un año la drástica división partidaria entre las fuerzas del régimen y las de la oposición pareció dar lugar a dos presidentes y dos gobiernos en toda regla, con Maduro manejando las riendas del poder interior y Guaidó reconocido en el ámbito internacional. Pero el primero se ha hecho fuerte sobre la desastrosa evolución de las condiciones de vida de los venezolanos. El régimen es perfectamente consciente de su inviabilidad a medio plazo. También por eso se empeña en consolidar posiciones para afrontar la ineludible transición democrática en condiciones de ventaja respecto a la oposición. La celebración de unas elecciones libres, cuyo resultado sea asumido con todas sus consecuencias por el conjunto del arco político, constituye la puerta de salida a una situación que se vuelve dramática por momentos. Pero ello exigiría no solo que los venezolanos huidos al extranjero puedan ejercer sin traba ninguna su derecho de sufragio. Requeriría también la desmovilización y el desarme previo de las organizaciones chavistas, así como el desmantelamiento de estructuras de poder opacas al control parlamentario y judicial. Comenzando por la previa recuperación de una Justicia independiente y de una administración electoral fiable en cuanto a su neutralidad política. Es por ello que Maduro trata de acabar con el Parlamento como fuente de legitimidad para la transición. De entrada ya ha conseguido, mediante su cerco a los legisladores, que no haya una mayoría clara comprometida con el cambio democrático.

Torra, en el alambre

El independentismo sigue empeñado en desafiar la legalidad, no aceptar más que aquellas decisiones judiciales que le son favorables y confundir las contrarias con supuestos «golpes de Estado». La negativa de Quim Torra a acatar la resolución de la Junta Electoral Central que le retira su acta de diputado del Parlamento catalán, en ejecución de una condena que le inhabilita por el delito de desobediencia, le sitúa al borde del desacato es impropia de un dirigente democrático. El Tribunal Supremo rechazó ayer suspender con carácter de urgencia tal medida, lo que no prejuzga el sentido de su fallo definitivo. El pronunciamiento de la Junta Electoral es jurídicamente discutible, como lo prueba que fuera aprobado por siete votos contra seis. También que, así como la condición de parlamentario resulta ineludible para ser elegido presidente de la Generalitat, su pérdida conlleva la automática destitución del cargo. No lo es, en cambio, la obligación de Torra de aceptar las normas del Estado de Derecho y que su radicalismo visceral condena de antemano al fracaso su interlocución sobre la crisis catalana con Pedro Sánchez.

EL CORREO

DESDE 1910 EL CORREO ESPAÑOL - EL PUEBLO VASCO

Director José Miguel Santamaría Alday

Subdirectores
Oscar Villasante,
Manuel Arroyo,
Zuriñe Ortiz de Latierro

Adjuntos a la dirección:
César Coca,
Pedro Brivings

Jefes de Área

Alberto Iñelitu y Ángel Pereda (Información), Óscar Alonso (Edición), José Mari Reviriego (Ciudadanos), Adolfo Lorente (Política), Encarni Bao (Mundo), Ángel Cordero (Opinión), José Vicente Merino (Economía), María José Tomé (Cultura), Antonio Santos (Deportes), Javier Trigueros (Suplementos), Iker Aizua (Edición Digital), Alejandro Belman (Dirección de Arte) y Bernardo Corral (Fotografía)

Secciones

Miguel Pérez, Sergio García y José Luis Ondovilla (Ciudadanos), Iván Orta (Política), Pascual Pereda (Suplementos), Juan Ángel Marugán (Edición cierre), Manu Álvarez (Corresponsal económico), Lourdes Aedo (Jantour), María del Carmen Navarro (Diseño), Mauricio Martín y Jesús Oleaga (Documentación)

Palabra de ministro

JAVIER ZARZALEJOS

Alberto Garzón y Manuel Castells van a prometer su cargo por una Constitución que aborrecen y ante un Rey cuya legitimidad niegan

Parece anticuado hablar de ‘comunistas’ y más aun atribuir a esa palabra una connotación crítica. Pero lo cierto es que en el Gobierno que va a presidir Pedro Sánchez va a haber comunistas. Lo son Pablo Iglesias y su señora, Irene Montero, que proceden de las Juventudes Comunistas; y lo es Alberto Garzón, al parecer seguro ministro de Consumo, que durante los últimos años ha pretendido desarrollar una carrera, más autoindulgente que brillante, como pensador político. Garzón no sólo es comunista, sino que ha escrito un libro para explicar por qué lo es. El libro se titula precisamente ‘Por qué soy comunista. Una reflexión sobre los nuevos retos de la izquierda’ (Península 2017), así que ni la intención del autor ni su adscripción dejan lugar a duda. El lugar de Marta Harnecker en la literatura comunista no está en peligro. La palabrería contradictoria y pretenciosa de Garzón sobre el comunismo es perfectamente prescindible.

Mayor curiosidad producen sus opiniones sobre los temas centrales del debate público en nuestro país, teniendo en cuenta que va a ser nada menos que ministro de Consumo. Apunta maneras cuando el epígrafe sobre la situación política española lo titula ‘Desmontar la Transición’. Y si, el texto cumple exactamente lo que promete el título. Empieza la tamborrada del comunista: «La idea fundamental que algunos defendemos, grosso modo, es que los déficits democráticos que padecemos en España tienen su origen en la Transición (...) que dejó incólumes determinadas estructuras de poder y prácticas políticas del franquismo». Por eso dice el autor que «tenemos la necesidad y el deber de seguir abriendo el melón de la Transición para poder cuestionar a los políticos y sus decisiones». El papel de los comunistas en la Transición, con Santiago Carrillo a la cabeza, es objeto de una descalificación radical y absoluta porque al participar el PCE en aquella «se contribuyó a legitimar el proceso y a crear en la militancia comunista la sensación de que la negociación con los fascistas era, en realidad, un objetivo deseado e incluso el inicio del socialismo».

‘Fascistas’, en la mente de Garzón, eran todos los empeñados en un pacto constitucional y de reconciliación nacional que no se apuntaron a la tesis de la ruptura que tanto echa de menos. Pero hay más. Sostiene Garzón que «la Transición que propugnaba la reconciliación entre españoles, a partir del consenso entre la élite franquista y los dirigentes de la oposición democrática, no era compatible con la visión heroica de la defensa republicana frente al golpe de Estado». Es lo que tiene la reconciliación, sobre todo si esa voluntad compartida parte de una cruenta guerra civil que casi todos –al menos hasta hoy– considerábamos necesario superar en nuestra vivencia histórica. Según Garzón, «nuestra tarea ha de ser la de reivindicar a los héroes y heroínas que arries-

garon o perdieron su vida, quemaron sus biografías y sacrificaron tantos aspectos vitales en pos de la democracia, porque es a ellos a los que debemos estar agradecidos».

¿Se referirá Garzón a las más de 850 víctimas de ETA, a los miles de heridos, a los que fueron expulsados del País Vasco por la coacción y el chantaje «quemando sus biografías»? Naturalmente que no, porque en la tópica y sectaria visión de la Transición, según el futuro ministro de Consumo, no hay lugar –ni una sola línea– para la continuada masacre de la banda terrorista. En esta vomitona narrativa, las víctimas de ETA no son las víctimas referenciales de nuestra democracia, sino aquellas que murieron en el paroxismo del enfrentamiento civil. Dicho lo cual podremos aceptar que, sin duda, esas víctimas eran antifascistas, pero hacer pasar por demócratas a la fuerza de choque del comunismo estalinista de los años 30 en España es excesivo y, sobre todo, falso. Para dolerse de todas víctimas de aquella carnicería no es necesario añadir más a su condición de españoles.

Se puede aventurar que Garzón se entenderá bien con otro futuro ministro, este de relumbrón, reconocido sociólogo, votante de Ada Colau y rendido admirador de Podemos. En su libro ‘Ruptura. La crisis de la democracia liberal’ (Alianza Editorial 2017), Manuel Castells abre su corazón más que su mente. Sobre «el actual Estado español» afirma que está «entronizado en una Monarquía de dudosa legitimidad en su origen», es «incapaz de expresar una realidad plurinacional» y se encuentra «desvirtuado por la corrupción de una derecha que aún controla los poderes fácticos».

No puede extrañar, por tanto, que considere la Constitución de 1978 «basada en una negociación de partidos y territorios vigilada y condicionada por las estructuras del Estado franquista, en particular por el Ejército, poder fáctico, y por el Rey, que encarnaba un proyecto legitimador de la sucesión del dictador». De ahí que sostenga, por ejemplo, que en la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña –que Castells olvidó que fue dictada con una mayoría ‘progresista’ en el Alto Tribunal– «se percibió la continuidad histórica ideológica entre el franquismo, su sucesión monárquica y la derecha española, el PP y Ciudadanos». Menos mal que para remediar todos estos males Castells ve en Podemos «una vía pacífica hacia la transformación revolucionaria del Estado».

Este pensamiento sectario que rezuma inquina a la reconciliación, nostalgia de una guerra que siguen interiorizando como perdedores, abominación intelectual y personal a lo que significó la Transición e ignorancia culpable de hechos esenciales en este proceso histórico se va sentar en el Consejo de Ministros después de prometer su cargo por una Constitución que aborrecen y ante un Rey cuya legitimidad niegan.



:: JOSE IBARROLA